

ra Gandarillas y Lic. Miguel T. Barron, en representacion de D. Gualterio Henry al tiempo de la vista, con todas las demas constancias de autos que se tuvieron presentes.

Considerando: que en el mes de Marzo del año próximo pasado, que D. Gualterio Henry extrajo de la Ciudad de Chihuahua la cantidad á que se refiere este juicio, no estaba vigente la ley de 9 de Diciembre de 1871, ni era de aplicarse la circular aclaratoria de 24 de Mayo de 1873 que cita el Magistrado de Circuito de Durango en su fallo.

Considerando: que la única ley á que debia sugetarse Henry para llenar las fórmulas para la exportacion, era la de 31 de Mayo de 1872, expedida por el Congreso de la Union, cuya ley prevenia, que los derechos se pagasen á la exportacion de los caudales, lo que claramente dá á entender que debian pagarse esos derechos en el puerto por donde se exportara el dinero.

Considerando: que esta intencion de Henry, de verificar el pago en la Villa de Ojinaga, punto por donde debia verificarse la exportacion, la manifestó desde luego; y que está probado que Henry no quiso defraudar los derechos de exportacion, pues se presentó á pagar á la Hacienda del Estado los que le correspondian por ella, sin ocultar la cantidad de una manera pública y visible.

Considerando: que no habiendo cometido Henry ningun delito ni omision, no es acreedor á la multa que le impuso la sentencia de 1ª instancia. Por estas consideraciones se decreta. Primero: que no han caido en la pena de comiso los diez mil doscientos veintiseis pesos que exportaba de la Ciudad de Chihuahua para la frontera del Norte, D. Gualterio Henry. Segundo: que tampoco es acreedor este Señor á que se le imponga la multa de doscientos pesos á que lo condenó el Juez de Distrito de Chihuahua en su sentencia. Tercero: D. Gualterio Henry, pagará al erario federal los derechos que por exportacion causaron los diez

mil doscientos pesos referidos.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales, haciéndose saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México 6 de Abril de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Dr. Liborio Irigoyen, secretario general del Gobierno de este Estado, contra el veredicto del gran Jurado, que lo ha declarado culpable, violando en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 20 de la carta federal de la República

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Resuelto el punto sobre la suspension inmediata del acto reclamado, en este juicio de amparo promovido por el C. Dr. Liborio Irigoyen, contra el veredicto del jurado que lo declaró culpable de faltas ministeriales, como secretario del Gobierno del Estado, debe ahora debatirse y resolverse definitivamente el punto principal de la solicitud. Esta se funda esencialmente, en las cláusulas 2ª y 5ª del artículo 20 de la Constitucion, que el actor supone violadas en su persona, por no habersele recibido su declaracion instructiva y confesion agravatoria, y por no habersele dado el tiempo necesario,

para preparar sus descargos y defensas. Pero contra estas aseveraciones del C. Irigoyen, existen los documentos que él mismo acompañó á su recurso de queja; porque de ellos consta que se le emplazó para esas diligencias que se evacuaron en parte, segun las certificaciones que libradas por la secretaría de la H. Legislatura, obran en el expediente de amparo solicitado por el C. Vicegobernador Lic. Miguel Castellanos Sanchez, y en las que aparece, que el quejoso compareció á leer su defensa, y que si no se le tomó su declaracion preparatoria ó instructiva, para dejar satisfechas por completo las garantías del citado artículo 20 que se dicen violadas, fué porque el C. Irigoyen no acudió al llamamiento que con aquel objeto consta haberle sido hecho. Mas esta razon no debió establecer una causa justa de dicha violacion, pues si la estableciese, aconteceria no pocas veces que el presunto reo de un delito cualquiera, se encerraria en el rigoroso mutismo, cuando por su juez fuese interrogado, seguro de que así ilucionaria los efectos del proceso; y la garantía otorgada al individuo, en la fraccion segunda citada, se trocaria en una amenaza contra la sociedad; porque la contumacia de los delincuentes, dejaría impunes los delitos.

El fiscal cree, por tanto, que la falta de declaracion instructiva del C. Dr. Liborio Irigoyen, no importa un quebrantamiento, sino mas bien una renuncia por parte suya de la repetida garantía constitucional. Tampoco se ha violado, en concepto del infrascrito, la 5ª del mismo artículo 20 en que apoya su queja; puesto que aparece de los adjuntos documentos referidos, que tambien se le citó para que le fuera recibida su confesion con cargos, á cuya diligencia se opuso, principalmente fundado en la inhabilidad de los CC. diputados, contra quienes el C. Castellanos tenia ya entablada su acusacion; pues sin embargo de que ni aun en los juicios judiciales, cuando se hallan en sumario, es admisible la recusacion, ni se entra en la calificacion de los

TOMO V.—PARTE II.

motivos que inhiban al juez que instruye las primeras diligencias de la causa, no es del resorte de la potestad federal, conocer y decidir si en efecto esos CC. miembros del Jurado estan ó estaban impedidos legalmente de formar parte de ese Tribunal que conocia de la expresada acusacion.

A la jurisdiccion de la autoridad nacional que ejerce V., solo incumbe y compete saber si ese Tribunal, no se creó ó estableció precisamente por la ley, para juzgar al C. Irigoyen en su caracter de secretario general de Gobierno, á fin de ver si se cumplia la garantía que protege el artículo 14 de la Constitucion; pero esta fué cumplida en el caso de que se trata, porque el artículo 89 de la del Estado, dispone que los delitos oficiales que cometan los funcionarios de la categoría del quejoso en este juicio, conozca la Legislatura del Estado erigida en gran Jurado; de manera que este Tribunal ya existia establecido nada menos que por la referida Constitucion local, con anterioridad á la existencia, verdadera ó supuesta, de la falta oficial que juzga; y el C. Irigoyen, al aceptar su empleo de secretario de Gobierno, quedó sometido á él en cuanto al conocimiento de los delitos comunes ó ministeriales que le imputasen. Ademas, la estrechez de los términos para la sustanciacion de esos juicios por jurados, no puede decirse que importe la violacion de las garantías de una justa y legítima defensa del acusado; tanto porque el propio artículo 20 de la Constitucion que las otorga, no fija los límites de esos términos, cuanto porque en los juicios por jurados, que son puramente administrativos, no puede exigirse toda la amplitud de los plazos concedidos con igual objeto en la sustanciacion de los procedimientos judiciales que estan sometidos á distintas reglas de derecho.

Tampoco puede asegurarse con propiedad, que no existía el quorum competente de diputados, para constituir el Jurado, y por consiguiente, que no llegó á formarse el verdadero Tribunal, para pronunciar el

fallo que motiva la queja; porque el Jurado debía decidir por mayoría de votos, como dice el artículo 88 de la citada Constitución local, y esta mayoría así podía consistir en un voto mas de la mitad que en un voto menos de todos los diputados presentes.

Si el C. secretario de Gobierno hubiese sido despojado de su empleo por una ley ó decreto de la H. Legislatura, para ese caso sí habría sido necesaria la presencia por lo menos de las dos terceras partes de sus componentes, en conformidad con el artículo 43 de la referida Constitución del Estado; pero como no es una ley ni decreto lo que remueve de sus funciones el actor, sino un veredicto que lo declara culpable, no ha sido indispensable ese número de votantes, que indispensable se considera, para la validez de dicha declaración.

Explicando Escriche en su célebre Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, las descripciones que hay entre los jurados ó jueces de hecho, y los Tribunales ó jueces de derecho, dice: "que se distinguen en 5º lugar, en que los de derecho ejercen jurisdicción, y pronuncian sentencia absolutoria ó condenatoria, aplicando en su caso las penas que la ley prescribe; y los de hecho, no tienen otra facultad que la de hacer una mera declaración sobre la gravedad de las presunciones que militan contra uno para seguir la acusación, ó sobre la certeza ó falsedad, existencia ó inexistencia, justificación ó falta de justificación de los hechos que se les proponen, y culpabilidad ó inocencia del acusado..... 4º en que los de derecho, en las causas que exclusivamente están sometidas á su juicio en cuanto al hecho y al derecho, tienen que ajustarse para la calificación ó estimación del valor de las pruebas, á las reglas que la ley les ha dictado al efecto; y los de hecho, en que en las causas en que intervienen, no están obligados á guiarse por reglas fijas en la calificación ó estimación de las pruebas, sino por su buen sentido, por su propia convicción,

por su conciencia, por la impresión que las mismas pruebas les causen." Tal es la base en que descansa la eminentemente democrática institución del Jurado: base aceptada por nuestras leyes generales y particulares, y que nosotros minaríamos hondamente si fuésemos á calificar la justicia ó injusticia del veredicto que ocasiona este juicio de amparo, para deducir de allí en su procedencia ó improcedencia.

Será injustísimo, como cree sinceramente el fiscal, que lo es, declarar al C. Liborio Irigoyen infractor del decreto de 19 de Junio último, cuyos dos artículos no alcanzan el infrascrito á comprender de que modo hayan podido ser infringidos por aquel; pero no es posible entrometerse en ese examen, para calificar la procedencia del recurso, sin riesgo de invadir la esfera de la soberanía del Estado, que también está puesta bajo la égida protectora de los tribunales de la federación. No debe tampoco ser motivo suficiente á conceder el recurso invocado, la consideración de lo que en su honra sufra el declarado culpable, ni el temor de que de su separación del puesto que ocupa, puedan surgir serias complicaciones en la sociedad; porque si se asentase este antecedente, como fundamento de amparo, bien podría cualquiera á quien se declarase formalmente preso por algún delito, intentar con buen éxito este recurso, porque mucho sufrirían su honra y su libertad, teniéndosele preso por presunciones de homicidio, por ejemplo. Y sin embargo, ¿deberá la justicia de la Unión amparar á quien está sometido á la justicia del Estado que funciona en la órbita legítima de sus atribuciones? Es evidente que no. Y menos habrá de concederse el amparo, por el peligro de perturbaciones públicas, resultantes de la ejecución del veredicto, contra el cual se interpone este recurso, pues solo sirve para hacer efectivas las garantías constitucionales del individuo, y no las funciones sociales del empleado, que en tal caso serían las violadas; porque si hay riesgo de graves complicaciones prove-

nientes de la separacion accidental ó permanente del C. Irigoyén de la secretaría de Gobierno, mayores dificultades pueden nacer de su permanencia en ese destino, dejando incumplida la declaracion de la Asamblea, que pudiera en caso dado emplear los medios de que dispone para hacerse respetar y obedecer.

Y la sociedad vendria á hacer la que realmente perdiese en esa ruidosa contienda de una potencia con otra; en que necesariamente habrian de tomar parte los que tienen á su cargo el deber de dar al pueblo ejemplo de alta ensenanza, de órden y respeto á la ley; para encaminarlos á su perfecta cultura y engradecimiento, bajo el influjo bienhechor de la paz y la tranquilidad.

Esta exposicion que el fiscal protesta haber formulado sin odio ni afecciones á ninguno de los bandos políticos que aspiran al Gobierno del Estado, mas que en sus propios sentimientos, ha inspirádose en las reglas del Derecho constitucional de la Nacion y particular del Estado, y en las diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia pronunciadas en otros casos análogos al presente, que se encuentran publicadas en el Semanario Judicial, tomo 2º entrega 4ª pág. 82, id. 29, pág. 187, id. 33, pág. 281, y tomo 3º entrega 85 pág. 582; porque es regla de jurisprudencia, que en donde hay la misma razon debe haber la misma disposicion de derecho; y si pues el mas elevado Tribunal de la República ha decidido que no era de concederse el amparo al C. Vice Gobernador de Querétaro Leandro Muzquiz, que lo solicitó contra el Gobernador de aquel Estado que lo destituyera de su encargo de Prefecto del Distrito del centro, porque tuvo en consideracion la Suprema Corte, "que la suspension del C. Muzquiz en sus funciones de tal empleo, es una providencia que *en manera alguna afectó su persona*; y que en consecuencia, si esa medida puede ser materia de una cuestion que resuelvan las leyes del Estado, sobre las funciones oficiales que se

disputan, no puede ser objeto de violacion de garantias individuales;" el fiscal tiene que concluir, como en efecto concluye pidiendo á V., con fundamento de los artículos 20 y 41 de la Constitucion general y del 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, declarar, 1º: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Dr. Liborio Irigoyen, contra el veredicto de la H. Legislatura del Estado, que con fecha tres del corriente mes lo declaró culpable de faltas ministeriales, como Secretario general de Gobierno; 2º; que se publique el fallo que V. pronuncie en cualquier sentido, para terminar este juicio, y 3º; que se remitan los autos originales á la Suprema Corte de Justicia para la correspondiente revision, en conformidad con lo que disponen los artículos 13 y 27 de la citada ley orgánica. Mérida, Noviembre 18 de 1873.—*P. Hijuelos*.—Es copia que certifico.—Mérida Diciembre 31 de 1873.—*Prudencio Hijuelos*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Diciembre 27 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Dr. Liborio Irigoyen, secretario general del Gobierno de este Estado, contra el veredicto del Gran Jurado que lo ha declarado culpable, violando en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 20 de la Carta federal de los Estados Unidos Mexicanos. Visto lo informado por la autoridad responsable sobre la suspension del acto reclamado; el pedimento fiscal; el auto en que se suspendió dicho acto; el informe sobre lo principal; el dictámen fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado en definitiva; la citacion para sentencia, y cuanto mas fué necesario ver.

Considerando: que la Legislatura del Estado, erigida en Gran Jurado, declaró culpable al quejoso en el veredicto que pronunció el 3 de Noviembre último, fojas 8, por haber autorizado el nombramiento del C.

Evaristo Esquivel para Gefe político de Motul, cuyo nombramiento dice que fué con infracción de la ley de 19 de Junio del presente año, y la fracción 2ª artículo 58 de la Constitución local.

Considerando: que dicha ley de 19 de Junio, compuesta de dos artículos, declara en el primero, usurpadora y anárquica la administración creada en aquella fecha; y en el segundo, nulos y de ningún valor todos los actos y disposiciones que emanasen de ella, incurriendo los que la apoyaren y obedecieren, en las penas del artículo 912 del Código penal del Estado.

Considerando: que el acusador C. R. Portas, fundó su acusación contra el actor, fojas 62, en este cargo: que el C. secretario Dr. Liborio Irigoyen, ha incurrido en la misma responsabilidad que el Vice-gobernador, según el artículo 64 de la Constitución particular, por haber autorizado el nombramiento del C. Evaristo Esquivel, con infracción de la ley y de la Constitución; que aquellas infracciones consisten, en haber servido Esquivel en la administración del teniente coronel J. B. Cueto y haber sido luego nombrado Gefe político de Motul, responsabilidad que exige el artículo 64 constitucional referido, al secretario general del Gobierno, en todas las disposiciones de este que autorice, contrarias á la ley.

Considerando: que la Legislatura originada en Gran Jurado, se convierte en Tribunal, y los diputados en los jueces que lo forman, cuyo Tribunal reunido para declarar á no culpables á los altos funcionarios en sus delitos oficiales, sigue un juicio criminal, por lo que debe conceder al acusado todas las garantías que señala el Pacto federal, puesto que la ley es igual para todos los ciudadanos, tengan ó no representación oficial, procediendo el recurso de amparo caso de no concedérselas.

Considerando: que aun cuando el Gran Jurado conservase su carácter de Legislatura, también procedería el recurso, siempre que violase las garantías individuales;

así porque el artículo 101 constitucional al establecer el juicio de amparo lo concede contra las leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, como porque en la discusión de este artículo, una de las cosas que se propusieron los constituyentes, fué establecer un remedio contra los abusos de los congresos. A este propósito, el diputado Moreno se expresó en estos términos: *"Se ha dicho que los tribunales van á ser un poder conservador, y como tal los admito, por que no van á legislar sino á salvar la Constitución y las garantías individuales. Es indudable que los Congresos pueden excederse en sus facultades, y se quiere que para estos casos, de una manera pacífica encuentren garantías los ciudadanos cuyos derechos se conculquen."* Historia del Congreso constituyente, por el Sr. Zarco, tomo 2º página 504.

Considerando: que el juicio seguido por el Gran Jurado, se inició el 31 de Octubre próximo pasado, fojas 62 vuelta; y terminó el 3 de Noviembre último, fojas 81 hasta la 86, es decir, que apenas duró el angustiado término de tres días; que en tan breve tiempo no era posible dar al acusado las garantías constitucionales requeridas en todo juicio criminal.

Considerando: que al tomársele su declaración preparatoria, no se negó á darla, sino que se excusó por el momento y ofreció evacuarla entre algunas horas, fojas 71 y 72, y sin apremiarlo dos ó tres veces para que la rindiera, declarándolo rebelde en caso negativo, como dispone la ley 2, título 9º libro 11 de la Novísima Recopilación; á fin de dar por practicada la actuación, mandaron que se le recibiera su confesión con cargos, en abierta oposición á la fracción 2ª artículo 20 de la Constitución federal.

Considerando: que no solo no le recibieron la confesión con cargos, pero ni aun le ministraron los datos del expediente para preparar sus descargos, fojas 72 y vuelta, faltando á la fracción 4ª del citado artículo 20 constitucional.

Considerando: que aun cuando se quisiera decir que el juicio seguido contra el Doctor Yrigoyen no es judicial, sino político, por lo que no debe estar sujeto á las formas tutelares del repetido artículo 20 constitucional, esto no es cierto, porque no hay ley que lo determine; antes al contrario, según el artículo 21 de la Constitución general, la aplicación de las penas propiamente tales es exclusiva de la autoridad judicial, debiendo por consiguiente reputarse judicial el veredicto de culpabilidad, que no es sino una sentencia condenatoria; pero dado caso que el juicio se considerase como político, no por eso dejaría de ser criminal, y el artículo 20 mencionado se contrae á todo juicio criminal.

Considerando: que por la certificación fojas 37 y 38 del notario público C. Carlos M. Aranda y la del oficial mayor encargado de la secretaría de gobierno, el decreto de 19 de Junio del presente año, aumentado á fojas 16, impreso en México en la imprenta de Vicente García Torres, queda probado que no se ha publicado en el periódico oficial «La Razon del Pueblo,» órgano en que se acostumbra promulgar las leyes del Estado, careciendo por tanto de promulgación, requisito sin el cual no puede llamarse ley, según los artículos 85 de la Constitución federal y 58 de la local; por que la promulgación es el acto por el que las leyes se notifican á la sociedad, es la voz viva del legislador. *Escribete, Diccionario de legislación, artículo Ley.*

Considerando: que no pudiéndose llamar se ley la de 19 de Junio citada, el quejoso no ha podido faltar á ella, ni menos al artículo 64 de la Constitución del Estado; que por consiguiente, no puede suponersele comprendido en la sanción penal de aquella ley, por cuya razón se ha violado en su persona el artículo 14 de la Constitución federal que dice: «Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho &c.»

Considerando: que según el artículo 29 de la Constitución local, la Legislatura no po-

drá instalarse sin la presencia de mas de la mitad del número total de los diputados que deban integrarla, los cuales siendo catorce, es claro que con ocho hay *quorum*, y puede criarse en Gran Jurado, como lo hizo en el juicio de que se trata, cuyo veredicto fué votado por nueve diputados, fojas 42, no habiendo, por lo mismo, infracción constitucional en la formación del Tribunal.

Considerando: que aun cuando el C. Dr. Liborio Yrigoyen, se ha separado de la secretaría de gobierno por la renuncia que le fué admitida, esta separación no es motivo para dejar de fallar en este juicio, porque en él se trata de garantías individuales que se seguirían violándose en su persona á pesar de la renuncia, en atención á que conforme al artículo 93 de la Constitución del Estado, la responsabilidad por delitos oficiales podrá exigirse hasta un año después que el funcionario haya ejercido su encargo.

Por estos legales fundamentos y de conformidad con los artículos 14, 20, 85 y 101 de la Carta federal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Dr. Liborio Yrigoyen, contra el veredicto del Gran Jurado que lo ha declarado culpable, violando en su persona las garantías que otorgan los artículos 14 y 20 de la Constitución federal.

2º Sáquese testimonio de este fallo para su publicación, y elévense los autos en revisión á la Suprema Corte de Justicia nacional, con arreglo á los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de amparo de 20 de Enero de 1869. Hágase saber —*L. Manzanilla.*

Ante mí.—*José Anacleto Castilla.*

Es copia que certifico para su publicación en el «Semanario Judicial» Mérida, Diciembre 31 de 1873.—*José A. Castilla,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Dr. Liborio Yrigoyen, Secretario General del Gobierno del mismo Estado, fundándose en que la Legislatura erigida en Gran Jurado para conocer de sus faltas oficiales, había violado con sus procedimientos los artículos 14 y 20 de la Constitución federal; visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal, el fallo del inferior, y considerando:

Primero: que la ingerencia legítima de los jueces federales en casos como el presente, está estrictamente limitada á investigar si en el juicio han sido violadas las garantías del hombre, consignadas en la carta fundamental, sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento ni el modo con que dichas garantías deben ser atacadas, bastando el hecho de haber sido.

Segundo: que consta en autos, que el solicitante recibió las citaciones necesarias para procurar su defensa, de donde se infiere que fueron suficientemente respetadas las garantías de que habla el artículo 20 de la Carta fundamental.

Tercero: que respecto de la legitimidad de la acusación, la brevedad de la instrucción y los términos todos del juicio con tal de dejar á salvo en lo sustancial los derechos del acusado, solo el Gran Jurado en que se erigió la 4ª Legislatura de Yucatan en uso de sus legales atribuciones, tiene derecho de decidir.

Cuarto: que no puede tacharse de incompetente á dicho Gran Jurado por no haber pronunciado el veredicto condenatorio con el número suficiente de representantes pues no se trataba de ley ó decreto de la Legislatura, sino del fallo de un Tribunal creado de antemano por la ley.

Quinto: que no teniendo impedimento al-

guno los representantes recusados, mientras no se hiciese respecto de ellos la declaración de haber lugar á la formación de causa, existía un *quorum* competente, y en consecuencia podía la Legislatura funcionar sin obstáculo alguno legal; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del estado de Yucatan, en 16 de Diciembre de 1873, y en consecuencia, que la Justicia de la Union, no ampara ni protege al C. Liborio Yrigoyen, contra el veredicto del Gran Jurado que lo declaró culpable.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Castañeda.*—*Ordaz.*—*Ramírez.*—*Lozano.*—*Castillo.*—*G. m. m. m.*—*Velsquez.*—*Zavala.*—*García.*—*Altamirano.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia, México Julio 23 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Lic. Miguel Castellanos Sanchez, Vice-gobernador del Estado, contra el veredicto del Gran Jurado de la Legislatura de ese Estado que lo declaró culpable.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Resuelto el punto sobre la inmediata suspensión del acto reclamado, en este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Miguel